

IEEBC-CG-PA49-2021

**PUNTO  
DE ACUERDO**

**CONSEJO GENERAL ELECTORAL  
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA  
P R E S E N T E.**

El suscrito Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en los artículos 36, fracción II, inciso a), y 47, fracciones II, III y XVI de la Ley Electoral del Estado de Baja California y 4, párrafo cuarto, inciso a), fracción I, del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California; respetuosamente someto a la consideración de este Órgano de Dirección Superior el siguiente **PUNTO DE ACUERDO** por el que se da **"RESPUESTA A LAS CONSULTAS FORMULADAS POR EL DELEGADO NACIONAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO, ASÍ COMO POR EL C. JOSÉ HUMBERTO RAMOS GONZÁLEZ"**, bajo los siguientes antecedentes, considerandos y acuerdos:

**GLOSARIO**

<i>Ayuntamiento</i>	XXIII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California.
<i>Consejo General</i>	Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California.
<i>Constitución General</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
<i>Constitución Local</i>	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
<i>INE</i>	Instituto Nacional Electoral.
<i>Instituto Electoral</i>	Instituto Estatal Electoral de Baja California.
<i>Ley Electoral</i>	Ley Electoral del Estado de Baja California.
<i>OPL</i>	Organismos Públicos Locales Electorales.
<i>PES/ Partido político</i>	Partido Encuentro Solidario
<i>Sala Superior</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>Tribunal Electoral Local</i>	Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California.

## ANTECEDENTES

**1. Solicitud de facilidades en el trámite y expedición de cartas de residencia.** El 2 de marzo de 2021, el Secretario Ejecutivo del *Instituto Electoral*, Mtro. Raúl Guzmán Gómez, solicitó apoyo a la C. Karla Ruíz Macfarland, presidenta municipal de Tijuana, con la finalidad de brindar las facilidades en el trámite y expedición de Cartas de Residencia para la ciudadanía que lo solicite en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

**2. Solicitud del PES.** El 12 de marzo de 2021, el C. José Alfredo Ferreiro Velazco, Delegado Nacional en funciones de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Solidario en el Estado de Baja California, solicitó al C. Carlos Mora Álvarez, Secretario General del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, Constancia de Residencia, del ciudadano Julián Leyzaola Pérez, para integrar el expediente del antes mencionado, con miras a efectuar su registro como candidato a encabezar la planilla de Municipales por el Ayuntamiento de Tijuana de dicho partido en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

**3. Consulta ciudadana.** El 12 de marzo de 2021, el C. José Humberto Ramos González presentó ante este *Instituto Electoral* escrito en el que planteó diversos cuestionamientos con relación a las actuaciones de las autoridades electorales respecto a las solicitudes de registro de los candidatos que no acompañen alguno de los requisitos establecidos en la normatividad.

**3. Respuesta a la solicitud del PES por parte del Ayuntamiento.** El 16 de marzo de 2021, el C. Carlos Mora Álvarez, Secretario General del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, mediante oficio número SGM/101/2021, dio respuesta a la solicitud relativa a la expedición de carta de residencia a nombre del C. Julián Leyzaola Pérez en el sentido que a continuación se expresa:

*"Una vez analizado el tema (...), concluimos que el otorgamiento de una carta de residencia es un derecho personalísimo, por lo que sólo se podrá otorgar este derecho al habitante interesado que cumpla con los requisitos que para este fin se requieren. Por ende, en base a lo anterior y haciendo valer la autonomía del municipio, consagrada en los artículos citados, no es viable otorgar la Carta de Residencia al Presidente del Partido Encuentro Solidario (PES)".*

**4. Presentación de medio de impugnación.** El 21 de marzo de 2021, el Partido Encuentro Solidario presentó, mediante oficio CDEPES/00003/2021, un medio de impugnación ante el *Tribunal Electoral Local*, a través del *Instituto Electoral* en el cual se controvierte lo relativo a la carta de residencia negada por el XXIII Ayuntamiento de Tijuana, mismo que fue radicado bajo el expediente MI-72/2021.

**5. Solicitud de apoyo por parte de la Secretaría Ejecutiva.** El 24 de marzo de 2021, la Secretaría Ejecutiva, en atención a la petición realizada por el Partido Encuentro Solidario, remitió a la Presidencia Municipal de Tijuana el oficio número IEEBC/SE/2345/2021, mediante el cual solicita de nueva cuenta a las autoridades municipales su colaboración a efecto de brindar las facilidades en el trámite y expedición de cartas de residencia, tanto a la ciudadanía como a los partidos políticos que así lo soliciten en el marco del actual proceso electoral.

**6. Solicitud del PES al Consejo General.** El 27 de marzo de 2021, el C. José Alfredo Ferreiro Velazco, Delegado Nacional en funciones de presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Solidario presentó el oficio PES/BC/CJ/070/2021, por medio del cual presenta diversas peticiones al *Consejo General* en dos vertientes claramente definidas:

*"Solicito de esa autoridad electoral:*

*PRIMERO: Convoque a sesión extraordinaria de Consejo General, a efecto de que se trate el tema objeto de la presente, ya que como se sabe, ese ese Instituto Electoral y el propio Tribunal Electoral, los responsables de conducir, supervisar y hacer cumplir las leyes electorales que rigen el presente proceso electoral en la entidad, procurando fundamentalmente la protección de los derechos políticos del ciudadano.*

*SEGUNDO: Solicitamos a este Consejo General Electoral, determine la forma en que el mencionado ciudadano deberá acreditar su residencia, a efecto de obtener su registro al cargo de Muncipe de la ciudad de Tijuana, Baja California".*

Con base en lo anterior, y



## CONSIDERANDO

### I. COMPETENCIA

1. Que este *Consejo General* es competente para expedir el presente punto de acuerdo, en virtud de ser el Órgano Superior de Dirección del *Instituto Electoral*, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios rectores de la materia electoral guíen todas las actividades de este, y contar con la facultad de emitir los acuerdos necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la *Ley Electoral*. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 36, fracción I, 37 y 46, fracción II, de la *Ley Electoral*.

### II. MARCO NORMATIVO APLICABLE

#### **"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"**

1. Que el artículo 1o. de la *Constitución General* dispone que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ese ordenamiento supremo y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones establecidos en el texto constitucional.

2. De igual forma, el precepto citado señala que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la *Constitución General* y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

3. Por su parte, el diverso 35 de la Carta Magna señala los derechos de la ciudadanía, entre los que se encuentran el derecho al sufragio en sus vertientes activa y pasiva:

*Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:*

*I. Votar en las elecciones populares;*

*II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;*  
(...)

4. Asimismo, el artículo 41, base V, Apartado C, párrafo primero de la *Constitución General*, establece que, en las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, estarán a cargo del OPL, que ejercerán funciones en las siguientes materias:

1. *Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;*
2. *Educación cívica;*
3. *Preparación de la jornada electoral;*
4. *Impresión de documentos y la producción de materiales electorales,*
5. *Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;*
6. *Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales;*
7. *Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;*
8. *Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior;*
9. *Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local;*
10. *Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y*
11. *Las que determine la ley.*

#### **“Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California”.**

5. Que el artículo 5, Apartado B, párrafo primero de la *Constitución Local*, establece que la organización de las elecciones estatales y municipales es una función pública que se realiza a través de un organismo público autónomo e independiente denominado *Instituto Electoral*, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, a cuya integración concurren los ciudadanos y los partidos políticos, según lo disponga la Ley. En el ejercicio de esta función pública, serán principios rectores la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y austeridad.



6. En ese sentido, refiere que, el *Instituto Electoral* ejercerá sus atribuciones en los términos previstos en la *Constitución General* y en la *Constitución Local*, de conformidad con la distribución de competencias que establecen las leyes de la materia, así como los convenios que suscriban, y agrupará para su desempeño, en forma integral y directa, entre otras, las siguientes actividades:

- a) *Desarrollar y Ejecutar los programas de educación cívica,*
- b) *Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;*
- c) *Imprimir los documentos y producir los materiales electorales;*
- d) *Preparar la Jornada Electoral;*
- e) *Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones;*
- f) *Declarar la validez de las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos;*
- g) *Expedir las constancias de mayoría y las de asignación de las fórmulas de representación proporcional;*
- h) *Realizar los procesos de Consulta Popular, Plebiscito y Referéndum;*
- i) *Ejercer la función de oficialía electoral respecto de los actos o hechos exclusivamente de naturaleza electoral;*
- j) *Implementar y verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto Nacional Electoral, y*
- k) *Las demás que determinen las leyes aplicables.*

7. Con respecto a los requisitos para fungir en diversos cargos de elección popular, el diverso 17 establece que, para ser electo Diputado propietario o suplente, se requiere:

*I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos e hijo de madre o padre mexicanos. Aquellos ciudadanos candidatos a Diputados Propietarios o Suplentes, cuyo nacimiento haya ocurrido en el extranjero, deberán acreditar su nacionalidad mexicana invariablemente, con certificado que expida en su caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, conforme a la Ley de Nacionalidad vigente a la fecha de la expedición del certificado.*

*II.- Tener 18 años de edad.*

*III.- Tener vecindad en el Estado con residencia efectiva, de por lo menos cinco años inmediatos anteriores al día de la elección. La vecindad en el Estado no se interrumpe cuando en el ejercicio de un cargo público, de un cargo de dirección nacional de partido político, por motivo de estudios o por causas ajenas a su voluntad, se tenga que residir fuera del territorio del Estado. Estos mismos requisitos serán necesarios tratándose de la elección consecutiva a que refiere el artículo 16 de esta Constitución.*

8. De igual forma, el artículo 41 consagra las cualidades que deben reunir las personas que aspiren a la gubernatura del Estado:

*I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento e hijo de madre o padre mexicanos. Aquellos ciudadanos candidatos a Gobernador del Estado cuyo nacimiento haya ocurrido en el extranjero, deberán acreditar su nacionalidad mexicana invariablemente, con certificado que expida en su caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, conforme a la Ley de Nacionalidad vigente a la fecha de la expedición del certificado.*

*II.- Tener treinta años cumplidos el día de la elección;*

***III.- Tener vecindad en el Estado con residencia efectiva, de por lo menos quince años inmediatos anteriores al día de la elección. La vecindad no se interrumpe cuando en el ejercicio de un cargo público, de un cargo de dirección nacional de partido político, por motivo de estudios o por causas ajenas a su voluntad, se tenga que residir fuera del territorio del Estado.***

*IV.- No ser ministro de cualquier culto religioso, a menos que se separe en los términos que establece la Ley de la Materia.*

*V.- Estar en pleno goce de sus derechos políticos.*

*VI.- No tener empleo, cargo o comisión en el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, en los Organismos descentralizados municipales o estatales, o Instituciones educativas públicas; salvo que se separen en forma provisional, noventa días antes del día de la elección*

9. Por su parte, el diverso 80 de la *Constitución Local* determina los requisitos para ser miembro de un Ayuntamiento, con la salvedad de que el Presidente Municipal debe tener 25 años cumplidos el día de la elección, se requiere:

*I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, hijo de madre o padre mexicanos.*

*Aquellos ciudadanos candidatos a municipales Propietarios o Suplentes, cuyo nacimiento haya ocurrido en el extranjero, deberán acreditar su nacionalidad mexicana invariablemente, con certificado que expida en su caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, conforme a la Ley de Nacionalidad vigente a la fecha de la expedición del certificado;*

***II.- Tener vecindad en el Municipio con residencia efectiva, de por lo menos cinco años inmediatos anteriores al día de la elección. La vecindad no se interrumpe cuando en el ejercicio de un cargo público, de un cargo de dirección nacional de Partido Político, por motivo de estudios, o por causas ajenas a su voluntad, se tenga que residir fuera del Municipio.***

*III.- No ser ministro de cualquier culto religioso, a menos que se separe en los términos que establece la Ley de la materia.*

*IV.- No tener empleo, cargo o comisión en el Gobierno federal, estatal o municipal, en los organismos descentralizados municipales o estatales, e instituciones educativas; salvo que se separen, en forma provisional, noventa días antes del día de la elección.*

*Estos mismos requisitos serán necesarios tratándose de la elección consecutiva a que refiere el artículo 78 de esta Constitución.*



**"Ley Electoral del Estado de Baja California"**

10. Que, conforme con lo establecido en el artículo 35 de la *Ley Electoral*, son fines del *Instituto Electoral*, entre otros, los siguientes:

- a) *Contribuir al desarrollo de la vida democrática en el Estado;*
- b) *Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales y el cumplimiento de sus obligaciones;*
- c) *Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar la Integración de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y los Ayuntamientos del Estado;*
- d) *Preservar la autenticidad y efectividad del sufragio;*
- e) *Realizar los procesos de consultar popular, plebiscito y referéndum en los términos de la ley de la materia, y*
- f) *Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar al fortalecimiento y difusión de la cultura cívica y política.*
- g) *Garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral.*

11. Además, el artículo 36, fracciones I y II, inciso a), de la *Ley Electoral*, señala que el *Instituto Electoral* se integra, entre otros órganos, por:

- a) *Un Órgano de Dirección, que es el Consejo General, y*
- b) *Órganos ejecutivos, entre los que se encuentra la Presidencia del Instituto Electoral*

12. En ese sentido, el *Consejo General* es el Órgano de Dirección Superior responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género guíen todas las actividades del *Instituto Electoral*, como se establece en el artículo 37 de la *Ley Electoral*.

13. En consonancia con lo anterior, la fracción II, del artículo 46 de la *Ley Electoral*, prescribe que es atribución del *Consejo General* la de expedir los acuerdos necesarios para el cumplimiento de las disposiciones de la propia Ley.

14. Bajo la misma directriz, el artículo 44 determina que el Consejero Presidente convocará a sesión extraordinaria cuando lo estime necesario o a solicitud que le formulen la mayoría de los representantes acreditados de los partidos políticos o de la mayoría de los consejeros electorales, señalándose en estos



casos el motivo de la cita y los asuntos a tratar. Asimismo, el diverso 47, fracción I, de la *Ley Electoral*, otorga al Consejero Presidente del *Consejo General*, la atribución de preservar la unidad y cohesión de las actividades de los órganos del *Instituto Electoral*.

15. Por otro lado, el artículo 104 de la *Ley Electoral*, establece que el proceso electoral, es el conjunto de actos ordenados por la *Constitución Local* y esta Ley, realizados por los órganos y las autoridades electorales, los partidos políticos y los ciudadanos, que tienen por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos.

16. Asimismo, el numeral 131 dispone que para ser candidato a Diputado propietario o suplente al Congreso del Estado, se deben reunir los requisitos establecidos en el diverso 17 de la *Constitución Local*.

17. En ese sentido, el artículo 132, expresa que para ser candidato a Munícipe de un Ayuntamiento del Estado, se deberán reunir los requisitos que establece el artículo 80 de la *Constitución Local*.

18. Bajo ese tenor, el diverso 133, prescribe que para ser candidato a Gobernador del Estado, se deberán reunir los requisitos que establece el artículo 41 de la multicitada *Constitución Local*.

19. Por su parte, el diverso 146 contempla la documentación que deberá acompañar a la solicitud de registro de candidaturas, a saber:

*I. Escrito de aceptación de la candidatura por parte del ciudadano propuesto;*

*II. Copia certificada del acta de nacimiento, de reconocimiento de hijo o de adopción, según el caso;*

*III. Copia de la credencial para votar;*

**IV. Constancia de residencia expedida por la autoridad municipal competente, y**

*V. Certificado de nacionalidad mexicana expedido por autoridad federal competente, en el caso de mexicanos nacidos en el extranjero.*

*VI.- Escrito mediante el cual se compromete a registrar por lo menos con quince días de anticipación a la celebración de la jornada electoral, sus compromisos de campaña ante el Instituto Estatal, y*

*VII. Escrito mediante el cual se compromete a presentar el examen para la detección de drogas de abuso, de conformidad con el artículo 5 de la Constitución del Estado. El Instituto Estatal celebrará convenio con alguna institución de Salud Pública en el Estado para practicar estos exámenes.*

20. Finalmente, el numeral 148, establece la obligación de que las autoridades municipales, una vez reunidos los requisitos del caso, expidan en forma gratuita y a petición escrita de los partidos políticos, las constancias que acrediten la residencia y tiempo de la misma, como a la letra señala:

***Artículo 148.-** Las autoridades municipales competentes, una vez reunidos los requisitos del caso, están obligadas a expedir, en forma gratuita y a petición escrita de los partidos políticos, las constancias que acrediten la residencia y tiempo de la misma.*

### III. RAZONES QUE SUSTENTAN EL PUNTO DE ACUERDO

1. Que, como ha quedado plasmado en el apartado de antecedentes de este Punto de Acuerdo los peticionarios formulan una serie de cuestionamientos y solicitudes a este *Instituto Electoral*, consistentes en lo siguiente:

2. El PES solicita, de forma sintética, lo siguiente:

- a) Convocar a sesión extraordinaria del *Consejo General*, a efecto de que analice el tema objeto de su petición, y
- b) La determinación de la forma en que se deberá acreditar la residencia a efecto de obtener el registro de una candidatura a municipe.

3. El C. José Humberto Ramos González plantea, de manera sustancial, lo siguiente:

- a) ¿Qué criterio aplicará esta autoridad electoral si un partido político presenta una solicitud de registro de una candidatura que no se acompañe de la constancia de residencia expedida por la autoridad municipal correspondiente?
- b) ¿Cuáles son los elementos que debe acompañar un partido político a la solicitud de registro de una candidatura para acreditar si el candidato cumple con el requisito constitucional de contar con vecindad en el Estado con residencia efectiva?

4. Por cuestión de método, este *Consejo General* procederá a dar respuesta a las consultas formuladas; en primer término, respecto de la petición hecha por el PES de convocar a sesión extraordinaria para que se discuta sobre el tema que le interesa y, en segundo término, se analizarán de forma conjunta el resto de puntos establecidos con el tema de la residencia como requisito elegibilidad para el registro de una candidatura, toda vez que estos últimos guardan una vinculación estrecha entre sí.

5. Con relación a la primera petición realizada por el *PES* en donde solicita que este *Consejo General* celebre sesión extraordinaria con la finalidad de tratar el asunto que le aqueja, procurando la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. Debe señalarse que, de conformidad con el artículo 44 de la Ley Electoral, el *Consejo General* sesionará previa convocatoria de la Consejera o Consejero Presidente, mismo que convocará a sesión extraordinaria **cuando lo estime necesario o a solicitud que le formulen la mayoría de los representantes de las y los partidos políticos** o de la mayoría de los consejeros electorales, señalándose en estos casos el motivo de la cita y los asuntos a tratar.

6. De lo anterior, se colige que la convocatoria a una sesión del *Consejo General* solo puede hacerse de dos maneras:

- a) Cuando la Consejera o Consejero Presidente lo estime necesario, y
- b) Cuando la mayoría de las y los representantes acreditados y/o consejeras y consejeros electorales, lo soliciten.

7. De este modo, la petición que formule un solo partido político para convocar a una sesión extraordinaria del *Consejo General* no resulta suficiente para que tenga un carácter vinculante sobre la Consejera o Consejero Presidente. De ahí que, la petición del Delegado del *PES* es inatendible, pues no se ajusta a los parámetros previstos en la *Ley Electoral* para que se solicite la celebración de una sesión del *Consejo General*.

8. Ahora, si bien el presente Punto de Acuerdo tiene por objeto analizar la petición formulada por el *PES* y esto implica la celebración de una sesión del *Consejo General*, es importante señalar que la misma, no se celebra en función de la petición realizada por el partido, sino por las reglas previstas en la *Ley Electoral* y el Reglamento Interior para poder dar la respuesta planteada por el *PES* y el ciudadano promovente.

9. Por otra parte, en relación con los diferentes cuestionamientos vertidos por los promoventes referentes al requisito de elegibilidad previsto en la *Constitución Local* sobre la vecindad en el Estado con residencia efectiva con la temporalidad prevista para cada cargo de elección popular; primeramente, es oportuno retomar el marco constitucional y legal que regula dicha materia.



10. Así, tal como se precisó en el marco normativo aplicable, la *Constitución Local* establece que para quienes quieran acceder a los cargos de Gobernadora o Gobernador del Estado, municipales de los ayuntamientos y diputadas y diputados del Congreso del Estado; estos, deben acreditar, entre otros, una vecindad en el Estado con residencia efectiva, de por lo menos quince y cinco años, respectivamente, inmediatos anteriores al día elección.

11. Por su parte, la *Ley Electoral* indica que la solicitud del registro de candidaturas deberá acompañarse, entre otros, documentos, de la constancia de residencia expedida por la autoridad municipal competente.

12. De lo anterior, tenemos que el requisito de elegibilidad referido se encuentra previsto en la *Constitución Local* y su regulación se desarrolló por el legislador en la propia *Ley Electoral*. Esto es, de la lectura del artículo 146 de la *Ley Electoral* se advierte que el legislador pretendió definir, mayormente, las documentales mediante las cuales se tendrían por colmados los requisitos de elegibilidad impuestos en la *Constitución Local* para aquellas personas interesadas en ser postuladas para algún cargo de elección popular previamente indicados.

13. Una vez expuesto lo anterior, es oportuno señalar que, la residencia ha sido definida por la academia en términos generales como “la acción de vivir habitualmente en un sitio o estar establecido en un lugar determinado”.

14. Ahora, por cuanto hace a los elementos que conforman el supuesto normativo relacionado con el requisito de elegibilidad que aquí se analiza, la *Sala Superior* ha dispuesto al resolver el Juicio de Revisión Constitucional SUP-JRC-170/2001, que el requisito de elegibilidad de la residencia debe satisfacer los siguientes elementos:

- a) Vecindad en el municipio en el cual se aspira al cargo de presidente municipal, misma que implica elementos de permanencia que consisten en mantener casa, familia e intereses en una comunidad social determinada.
- b) Residencia efectiva, es decir, que sea real, no ficticia y con el ánimo de permanencia.
- c) Residencia ininterrumpida, lo cual significa que después de haber establecido la residencia en un lugar determinado, ésta no la haya cambiado a otro sitio, aunque sea temporalmente, y
- d) Que esa residencia sea de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable al caso concreto.

15. En consonancia con lo anterior, es necesario retomar lo sostenido por la *Sala Superior* en el Juicio de Revisión Constitucional SUP-JRC-024/2000, donde señaló que, tal requisito tiene su razón de ser en la necesidad de que los municipios sean gobernados por quienes tengan conocimiento de la problemática que se vive en el seno de esa comunidad, que haya adquirido la solidaridad con el grupo social necesaria para velar por los intereses del mismo, en cuanto se siente parte de él; sin embargo, el mismo órgano jurisdiccional **concluyó que es muy difícil que exista una prueba contundente para demostrar la residencia y vecindad de una persona, por lo que se debe tomar en cuenta el cúmulo de elementos probatorios que presenten los interesados**, con el fin de demostrar que han tenido contacto prolongado con un determinado lugar y que en ese lugar habitan de manera permanente junto con su familia, que ahí tienen asentados sus intereses y que son parte de la comunidad de ese lugar, a la que los une un sentimiento de solidaridad, porque sólo a través de dichos elementos es como las autoridades pueden verificar que las personas son residentes y vecinos de un determinado lugar.

16. Ahora, si bien los precedentes citados establecen los elementos que resultan del requisito de elegibilidad bajo estudio y que el mismo puede acreditarse de diversas maneras, toda vez que el fin que persigue la demostración de este requisito es el arraigo que la persona tiene con la comunidad que pretende demostrar, debe tenerse presente que en el caso que nos ocupa, el legislador de Baja California, consideró que la residencia se demuestra con la presentación de la constancia o carta de residencia que expida la autoridad municipal competente, pues de lo contrario no habría establecido una disposición legal de esa naturaleza.

17. No obstante, bajo este mismo supuesto previsto en la entonces legislación de Zacatecas, la *Sala Superior* ya se ha pronunciado al resolver el Juicio de Revisión Constitucional con clave SUP-JRC-045/2007, donde el tribunal señalado como autoridad responsable adujo que la exhibición de **una constancia de residencia expedida por un secretario de gobierno municipal era una exigencia insalvable, porque el requisito de elegibilidad, consistente en la residencia efectiva en el municipio de que se trate, durante el periodo que exige la ley, no podía demostrarse por otros medios**. Ante esa argumentación, la *Sala Superior* determinó que **al contrario de lo afirmado por el tribunal responsable, para tener por demostrado el requisito consistente en la residencia efectiva en el municipio de que se trate, durante el lapso exigido anterior a la fecha de la elección, la constancia de residencia que expidiera el secretario de gobierno municipal es un documento previsto en la ley como una forma de preconstituir la prueba**



de ese hecho, en beneficio del ciudadano, pero tal situación no impide que el requisito mencionado pueda demostrarse con otros medios de igual o mayor valor convictivo cuando se encuentren dificultades serias para obtener la constancia señalada directamente por la ley. Se concluyó pues, que la constancia de residencia no constituye un elemento *ad solemnitatem* que se traduce en un requisito formal impuesto por la ley para que un acto jurídico tenga validez, sino un elemento *ad probationem*, consistente en una formalidad que se exige para la demostración de un acto, sin que su inobservancia engendre la nulidad del mismo.

18. Como se puede advertir de los precedentes dictados por la *Sala Superior* relacionados con el requisito de elegibilidad de la residencia efectiva, el máximo órgano jurisdiccional de la materia sostuvo en ese entonces que:

- a) Es muy difícil que exista una prueba contundente para demostrar la residencia y vecindad de una persona;
- b) Existen múltiples documentos que probatorios que las personas pueden presentar para demostrar la misma;
- c) La exigencia de la constancia o carta de residencia es solo una forma de preconstituir la prueba de ese requisito, y que
- d) La ausencia de la presentación de la carta o constancia de residencia no tiene que generar la nulidad del acto en sí mismo.

19. Lo anterior, se robustece al acudir al contenido de la Jurisprudencia 3/2002 de la propia Sala Superior, la cual es de rubro y texto siguiente:

**CERTIFICACIONES MUNICIPALES DE DOMICILIO, RESIDENCIA O VECINDAD. SU VALOR PROBATORIO DEPENDE DE LOS ELEMENTOS EN QUE SE APOYEN.**- Las certificaciones expedidas por autoridades municipales sobre la existencia del domicilio, residencia o vecindad de determinada persona, dentro de su ámbito territorial, son documentos públicos sujetos a un régimen propio de valoración, como elementos probatorios, dentro del cual su menor o mayor fuerza persuasiva depende de la calidad de los datos en que se apoyen, de tal modo que, a mayor certeza de dichos datos, mayor fuerza probatoria de la certificación, y viceversa. Así, si la autoridad que las expide se sustenta en hechos constantes en expedientes o registros, existentes previamente en los ayuntamientos respectivos, que contengan elementos idóneos para acreditar suficientemente los hechos que se certifican, el documento podrá alcanzar valor de prueba plena, y en los demás casos, sólo tendrá valor indiciario, en proporción directa con el grado de certeza que aporten los elementos de conocimiento que les sirvan de base, los cuales pueden incrementarse con otros elementos que los corroboren, o debilitarse con los que los contradigan.



20. La jurisprudencia citada es clara al precisar que las cartas o constancias de residencia no tienen, *per se*, un valor probatorio pleno, sino que su valor depende precisamente de los elementos que aporta la persona interesada o bien de aquellos que obran en poder de la propia autoridad municipal.

21. Es importante destacar, que los precedentes citados se emitieron con anterioridad a la reforma constitucional en materia de derechos humanos; sin embargo, esto no fue obstáculo para que la *Sala Superior* emitiera estos con el fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos político electorales de las ciudadanas y ciudadanos.

22. De este modo, posterior a las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y político-electoral, la *Sala Superior* ha emitido jurisprudencia en relación con el tema de la residencia efectiva como requisito de elegibilidad para acceder a cargos públicos, señalando que, **si bien pueden existir documentos que resulten preferibles para su acreditación, lo cierto es que la satisfacción de exigencias legales sustanciales no debe subordinarse a elementos formales como lo es la exigencia de documentos específicos, sino que se deben aceptar otros elementos permitidos por el orden jurídico que hagan posible su plena satisfacción.** Lo anterior, tal como lo mandata la Jurisprudencia 27/2015 de rubro y contenido siguiente:

**ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES. LA RESIDENCIA COMO REQUISITO ESENCIAL EN EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLOS OBLIGA A LA AUTORIDAD ELECTORAL A VALORAR TODOS LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE RESULTEN APTOS PARA ACREDITARLA.-** De la interpretación de los artículos 1º, 41, párrafo segundo, Base V, 116, fracción IV, inciso c), y 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 100, párrafo 2, inciso f), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se aprecia que los derechos humanos establecidos en la norma fundamental y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, se deben interpretar otorgando a las personas la protección más amplia, bajo el principio *pro homine* o *pro persona*; lo cual impone como obligación a las autoridades considerar que tratándose del cumplimiento de requisitos legales, **si bien pueden existir documentos que resulten preferibles para su acreditación, lo cierto es que la satisfacción de exigencias legales sustanciales que incidan en requisitos de elegibilidad o para el nombramiento de funcionarios, no debe subordinarse a elementos formales como lo es la exigencia de documentos específicos, sino que se deben aceptar otros elementos permitidos por el orden jurídico que hagan posible su plena satisfacción.** En consecuencia, ante la falta de la constancia para acreditar la residencia efectiva de un aspirante a integrar un organismo público electoral local, la autoridad competente

**debe atender la situación particular del caso para determinar si de la valoración adminiculada de los medios de prueba aportados por el interesado se cumple o no el requisito**, sin que sea válido limitar a negar el registro por el hecho de no haberse adjuntado dicho comprobante pues la falta de presentación no debe conducir a esa determinación cuando existen otros elementos que logran acreditar ese requisito.

**23.** Con base en la jurisprudencia de mérito, este *Consejo General* estima que la misma resulta aplicable, *mutatis mutandis*, al caso que se analiza, pues si bien la misma se refiere a los casos relacionados con la integración de los organismos públicos locales, el requisito analizado por la *Sala Superior* en ese caso, es el mismo que se debe colmar en la ocupación de los cargos de elección popular; de modo que, no sería válido desconocer el contenido del criterio interpretativo dado por el máximo órgano jurisdiccional en la materia.

**24.** Además, a la luz de lo previsto en el artículo primero de la *Constitución General*, y retomando lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente Varios 912/2010 todas las autoridades del país deben interpretar el orden jurídico conforme a los derechos humanos establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

**25.** Lo anterior, la Suprema Corte ha señalado se le conoce como interpretación conforme en sentido amplio, la cual persigue dos propósitos: asegurar la integración normativa de los derechos y resolver las tensiones, conflictos o antinomias que se presenten entre los mismos.

**26.** En ese sentido, y en atención a la segunda petición del Partido Encuentro Solidario, así como a los cuestionamientos del C. José Humberto Ramos González acerca de los criterios aplicables por esta autoridad ante la falta de constancia para acreditar la residencia efectiva de una candidata o candidato, es menester señalar que para esta autoridad electoral, la residencia es un hecho objetivo, cuya configuración no depende de la existencia de la documental en cuestión y en realidad, la constancia expedida por la autoridad municipal, aunque constituye el medio de prueba idóneo para demostrar que el hecho objetivo de la residencia ocurrió en un lugar y periodo determinados; de conformidad con el principio *pro persona* establecido en el artículo 1º de la *Constitución General*, así como el principio de pertinencia aplicable en materia probatoria, existe la obligación por parte de la autoridad electoral a valorar todos los medios de prueba que resulten aptos para su acreditación.

27. Lo anterior es así, en atención a los criterios interpretativos que surgieron a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 y que se extienden hasta el terreno de los derechos político-electorales, entre los que se encuentra el derecho de sufragio activo y pasivo que se consagran principalmente en el artículo 35, fracciones I y II de la *Constitución General*.

28. Por lo tanto, siguiendo las pautas brindadas por la *Sala Superior*, este *Instituto Electoral* **concluye que, a falta de constancia de residencia expedida por una autoridad municipal, deberá realizarse un ejercicio de ponderación y valoración de pruebas y circunstancias específicas de las y los interesados con el fin de demostrar que han tenido una vecindad en el Estado con una residencia efectiva de por lo menos la temporalidad que la norma aplicable indique.**

29. Por último, es necesario señalar que, si bien esta autoridad electoral no pretende establecer taxativamente los medios de prueba para acreditar la vecindad en el Estado con residencia efectiva de una persona para los fines establecidos en la *Constitución Local* y la *Ley Electoral*, deben tenerse en consideración todos aquellos que se presentan ante las instancias municipales correspondientes para solicitar la multicitada constancia.

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, este Consejo General emite los siguientes:

## ACUERDOS

**PRIMERO.** Se da respuesta a la solicitud formulada por el Partido Encuentro Solidario a través de su Delegado Nacional en funciones de presidente del Comité Directivo Estatal, en los términos establecidos en el considerando III del presente Punto de Acuerdo.

**SEGUNDO.** Se da respuesta a la consulta planteada por el C. José Humberto Ramos González, de conformidad con lo expresado en el considerando III del presente Punto de Acuerdo.



**TERCERO.** Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el contenido del presente Punto de Acuerdo, mediante oficio al Delegado Nacional en funciones de presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Solidario, y de manera personal al C. José Humberto Ramos González, en el domicilio que haya señalado para tal efecto.

**CUARTO.** Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el contenido del presente Punto de Acuerdo, mediante oficio a las representaciones de los partidos políticos acreditadas ante el Consejo General, así como de manera personal a las y los aspirantes a candidaturas independientes que hayan obtenido la constancia de porcentaje a favor, y por oficio a las consejeras y consejeros presidentes de los consejos distritales electorales del Instituto Estatal Electoral de Baja California, para los efectos legales conducentes.

**QUINTO.** Publíquese el presente Punto de Acuerdo en el portal de internet institucional, dentro del término señalado en el artículo 22, párrafo cuarto, del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

Dado en sesión virtual del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil veintiuno.

**ATENTAMENTE**

*"Por la autonomía e independencia  
de los organismos electorales"*

**C. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ MORALES**

**CONSEJERO PRESIDENTE**

